



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, catorce de julio de dos mil veintitrés.

22-333

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante: **LILIANA MARIA GOMEZ CASTRO.**
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E, PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-004-2019-00403-01.
Tema: ineficacia traslado
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A, contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado, se reconoce personería jurídica a la doctora CAROLINA RIVERA GOMEZ identificada con C.C. No. 1.037.612.813 y portadora de la T.P. No. 225.143 del C.S de la J. para representar los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora ELIANA MORENO PEDROZA, identificada con c.c. 43.921.415 y TP. 173.191 del C.S. de la J, como apoderada general adscrita la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que reposa en el plenario, y de conformidad con la Escritura Publica No. 3.374 del 2 de septiembre de 2019, suscrita en la notaria 9 del circulo de Bogotá.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 023** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES.

1.1. LO PRETENDIDO.

Solicitó la demandante, se declare la **INEFICACIA** del traslado al RAIS y como consecuencia se condene a Protección S.A a devolver a Colpensiones E.I.C.E, las cotizaciones con sus correspondientes rendimientos. Seguidamente solicitó que se ordene a Colpensiones, a admitirla como afiliada y a recibir las cotizaciones provenientes del RAIS. Finalmente solicitó se condene en costas y gastos del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 13 de febrero de 1968, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 50 años de edad.
- ✓ Que se afilió inicialmente al ISS, hasta el 1 de septiembre de 1994, fecha en la cual se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A.
- ✓ Que el 1 de julio de 1995 se afilió al ISS hoy Colpensiones (sic).
- ✓ Que el 1 de enero de 1996 se trasladó a Horizonte Porvenir S.A.(sic).
- ✓ Que el 1 de marzo de 1999, se afilió a la AFP Colpatria hoy Porvenir S.A.
- ✓ Que el 6 de octubre del 2000, se trasladó a Porvenir S.A.
- ✓ Que el 8 de mayo de 2015 se trasladó a Protección S.A.
- ✓ Que para el traslado de fondos, la demandante recibió a un funcionario de Protección S.A quien no le dio la información necesaria, y se limitó a decir que el traslado era necesario porque el ISS se iba a acabar y se quedaría sin pensión, además de mencionarle que en el fondo privado se podría pensionar a cualquier edad y con una pensión mejor (sic).
- ✓ Que solicitó a Colpensiones E.I.C.E el traslado a dicho régimen pensional, entidad que, mediante comunicado fechado a 10 de mayo de 2019, negó la solicitud.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Protección S.A, consideró ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la demandante y la afiliación realizada a ducha AFP, frente a los demás resaltó que para la fecha de afiliación indicada, el demandante realizó cambio de AFP y no traslado de régimen pensional, aclarando que en dicho momento la Protección S.A. le explicó todo lo relacionado con el RAIS de forma clara, precisa y transparente.

Por su parte Porvenir S.A, resaltó que no le consta ningún hecho plasmado en el libelo demandatorio, frente a los demás indicó que lo le constaban aclarando que el traslado inicial al RAIS se dio el 1 de agosto de 1994, y la afiliación a Porvenir se realizó el 1 de septiembre de la misma anualidad.

Finalmente, Colpensiones E.I.C.E, estimó como ciertos los hechos relativos a la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación inicial al ISS, el traslado de régimen pensional, y la movilidad efectuada a Porvenir S.A, frente a los demás adujo no constarle que la demandante haya tomado la decisión de trasladarse al fondo de pensiones con base a una información que vicio su consentimiento, bajo la ausencia de información sobre las consecuencias del traslado.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.

Mediante sentencia proferida el 07 de diciembre de 2022, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín decidió:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado de LILIANA MARIA DE FATIMA GOMEZ CASTRO, identificada con cédula 42894990 que hiciera al RAIS a la sociedad HORIZONTE S.A., hoy AFP PORVENIR S.A. quedando incólume su afiliación al RPM que administra COLPENSIONES, entendiéndose que estuvo afiliada a dicho régimen de manera permanente y sin solución de continuidad, desde la afiliación inicial conforme se expuso en la parte motiva, debe entenderse que también queda ineficaz la afiliación realizada de manera posterior a la AFP PROTECCIÓN S.A.

SEGUNDO: ORDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., como la actual AFP de la demandante para que proceda a la devolución o retorno de todas la sumas que recibió con ocasión del traslado, tales como aportes, cotizaciones y los rendimientos financieros, que integran la cuenta de ahorro individual, serán retornados a COLPENSIONES, igualmente los gastos de administración, comisiones o gastos de administración y pagos destinados a la conformación del capital del FGPM, los cuales deben estar debidamente indexados, desde su causación hasta la fecha del pago, COLPENSIONES los recibirá a dentro del término de 30 días hábiles a la ejecutoria de esta sentencia, y los recibirá a satisfacción y equivalencia. Estos conceptos retornados deberán ir con el detalle de los ciclos, los valores, y tiempos, de manera que COLPENSIONES reciba la información relevante e importante.

TERCERO: ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A. retornar a COLPENSIONES quien recibirá a satisfacción y equivalencia la totalidad de valores correspondientes a gastos de administración, pagos de seguro y reaseguro y pagos a la conformación del capital de FGPM, debidamente indexados desde su causación hasta su pago, con cargo a sus propios recursos, lo cual se acompañará con la documentación que acredite ciclos y valores de manera detallada.

CUARTO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, sucesora procesal del ISS liquidado, para que reciba los valores provenientes de PORTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A, y proceda a reactivar la afiliación de la demandante en el RPM, actualizando la historia laboral con los recursos proveniente del RAIS, debe brindar todas las garantías del RPM, y debe involucrar en el histórico laboral de aportes, todas las cotizaciones del RAIS.

QUINTO: DESESTIMAR las excepciones de fondo o merito propuestas por PROTECCIÓN, PORVENIR y COLPENSIONES.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte vencida, PORVENIR S.A., fijó como agencias en derecho la suma de \$2.300.000. de pesos. No hay condena en costas ni a favor ni en contra de COLPENSIONES, ni PROTECCIÓN S.A.

SÉPTIMO: DISPONER el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior de Medellín, a favor de COLPENSIONES únicamente si no hace uso del recurso de apelación.”

Dentro del término concedido por la ley Porvenir S.A interpuso recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS.

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR.

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN.PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Consideró que no existen razones fácticas o jurídicas que den lugar a la declaratoria de ineficacia, atendiendo a que el traslado obedeció a una decisión libre y voluntaria, por lo que no es procedente aplicar la sanción establecida en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, sumado a que la demandante manifestó en el interrogatorio de parte que su traslado se dio con el acompañamiento de asesores comerciales de los fondos privados, los cuales le manifestaron características propias del RAIS, como que sus aportes podrían generar unos rendimientos, que podrían ser heredados, y que su pensión de vejez no tendría un requisito de edad, en ese sentido, en relación con la prueba documental, se puede inferir que se cumplió con el deber de información que se le exigía a las AFP al momento del traslado, es decir conforme al Decreto 663 de 1993, y a la Ley 100 de la misma anualidad. Adicionalmente puso de presente que la demandante contó con múltiples oportunidades para retornar al RPM y no lo hizo, inclusive realizó traslados horizontales entre AFP lo que demuestra un interés por permanecer vinculada al RAIS y disfrutar de las ventajas que este acarrea. De otro lado resaltó que lo que motiva a la demandante para retornar a Colpensiones no es la forma en cómo se dio su vinculación, sino que es el incumplimiento de una expectativa económica con relación a la cuantía de su mesada pensional, y en ese sentido, no es procedente aplicar la jurisprudencia sobre la ineficacia en estos casos, toda vez que conforme a lo indicado por la C.S.J el incumplimiento de la expectativa económica no es suficiente para declarar la ineficacia, pues el acto jurídico de traslado de régimen debe ir direccionado a como quiere el eventual afiliado que se administren sus recursos y no a cuánto ascendería el monto de la mesada pensional, pues esto no se compadecería con la naturaleza para la cual se crearon

ambos regímenes pensionales. Aunado a lo anterior, la obligación de aportar la documentación que acredite la entrega de información al momento del traslado, solo surgió a partir de la emisión de la Circular 016 de la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que no es cierto que la AFP se encuentre en mejor posición probatoria que acredite la entrega de información. Frente a las obligaciones de buen consejo y doble asesoría, estas nacieron posteriormente en el año 2010 y 2014 al tenor de las sentencias SL1688- 2019, SL1689-2019 y SL3464- 2019, y en relación a ello, no es predicable imputar conductas que no eran exigibles al momento en que se realizó el traslado de régimen pensional, por lo que la conducta de la AFP debe analizarse bajo el principio de legalidad y de irretroactividad de la norma frente al deber de información que le asiste a los fondos privados. De otro lado, indicó que a los afiliados también les corresponde un deber diligencia y cuidado en sus propios negocios, y en ese sentido no puede entenderse que la demandante pretenda retornar al RPM, excusándose en que no recibió información cuando la misma no se preocupó por su futuro pensional, pues la demandante hizo caso omiso a la advertencia que se le realizó antes de cumplir los 47 años de edad, para que se acercara a la AFP y valorara su situación pensional, lo que demuestra un desinterés de la actora en cuanto a su situación pensional.

De otro lado, solicitó se revoque la condena de trasladar los gastos de administración, sumas de seguros previsionales y el aporte al FDPM de manera indexada, toda vez que estos rubros impondrían una condena doble en contra de Porvenir, pues también se condena el traslado de unos rendimientos, y si lo que se busca con la indexación es que dichos dineros no sufran detrimento por el paso del tiempo, ese detrimento se puede ver resarcido con el traslado de unos rendimientos que con la declaratoria de la ineficacia no debieron de haber existido, más aun cuando los rendimientos ya fueron trasladados a Protección.

En igual sentido lo solicitó en cuanto a la condena de gastos de administración, atendiendo a que no se descontaron de forma caprichosa, pues esto se hizo conforme al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, resaltó que los mismos se usaron para causar los rendimientos en la cuenta de ahorro individual. En cuanto a los seguros previsionales, indicó que se pagaron a las aseguradoras para cubrir las contingencias, haciendo la anotación que los mismos también son descontados en el RPM.

Finalmente, frente a las costas, consideró que dicha condena debe ser revocada por cuanto la AFP actuó en todo momento de buena fe y cumpliendo con la normativa que le asistía para ese momento.

2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.3.1 PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Solicitó que en caso de confirmarse la providencia de primera instancia, se tenga en cuenta que las AFP demandadas deben trasladar con cargo a su propio patrimonio todas las sumas que integran la cuenta de ahorro individual de la demandante, como cotizaciones, aportes, sumas adicionales, rendimientos financieros, gastos de administración pagos de seguros y reaseguros Fogafin, fondo de garantía de pensión mínima y el eventual bono pensional, conceptos que deben trasladarse de forma indexada, lo anterior con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y así evitar un detrimento patrimonial en contra de la entidad.

2.3.2 PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

Indicó que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la accionante se realizó de forma espontánea, y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley para la fecha de afiliación al RAIS. Resaltó que siempre cumplió con el deber de información, mediante una asesoría en la cual se manifestaron las características del RAIS, lo cual quedó plasmado en el formulario de afiliación y poniendo de presente que los demás documentos que acreditan la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, en el mismo sentido la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, al tenor de las sentencias SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464- 2019.

De otro lado, solicitó se revoque la condena de trasladar los aportes recibidos con motivo de la afiliación, considerando que conforme al concepto de las restituciones mutuas, la condena de trasladar de manera indexada los valores ordenados en el fallo de primera instancia, supondría una doble carga sobre Porvenir S.A., ya que, dicho detrimento que sufre el valor económico de los descuentos y el cual se busca reponer con la indexación, se compensaría con el traslado de unos rendimientos que nunca debieron de haber surgido tras la declaratoria de ineficacia.

Frente a los gastos de administración, indicó que estos tienen por mandato legal una destinación específica que, se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, por lo que dichos descuentos han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, ya que se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta de la demandante y el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que ha venido disfrutando hasta la actualidad, y que no pueden retrotraerse pues la cobertura ya se ha prestado, y esta última no es posible devolverla o retrotraerla al afiliado. Anteriores

consideraciones que realizó con base al concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000.

Finalmente, frente a las costas procesales, resaltó que es improcedente por cuanto la AFP siempre obró con buena fe objetiva, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época en la que se dio el traslado de la parte demandante del RPM al RAIS.

3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.

De acuerdo con lo planteado en el recurso de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4 CONSIDERACIONES.

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar*

sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado**. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna*. (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA LA DEMANDANTE	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta a la actora afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por la demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 27 de julio de 1994, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Horizonte hoy Porvenir S.A (fl 219 del archivo 03 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía la actora respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración, y por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características de RAIS, y las implicaciones, ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente la señora LILIANA MARIA GOMEZ CASTRO en el aludido interrogatorio expuso que su grado de escolaridad es profesional en administración de empresas, y que labora en Industrias Medicas San Pedro, como coordinadora de facturación y cartera. Respecto al traslado a Horizonte, indicó que cuando trabajaba en Gran Ahorro, asesores del fondo privado mediante reunión grupal de 20 minutos, le indicaron que el ISS se iba a terminar, por lo que era necesario tener un fondo, que se podía pensionar en cualquier momento, con una mejor mesada y que la pensión tenía carácter heredable, razones que considero suficientes para trasladarse de régimen pensional. Resaltó que su motivación para retornar a Colpensiones, es el sentimiento de engaño con ocasión a la diferencia en la cuantía de su mesada pensional.

Respecto a la movilidad Porvenir S.A, indicó que se dio con ocasión a los cambios de empleador, pues el traslado se realizó con el fondo privado que asesoraba a la empresa. En cuanto a la afiliación Protección S.A, indicó que asesores del fondo llegaron a su lugar de trabajo, y le indicaron que dicho fondo era mejor, ya que brindaba una asesoría personalizada y permanente, aunado a que mantendría los mismos beneficios ofrecidos por las anteriores AFP, y en razón a la ausencia de asesoramiento por parte de Porvenir, decidió afiliarse a dicha AFP.

Respecto a la re asesoría, indicó que un asesor de Porvenir S.A, fue a la empresa donde laboraba y le ratificó que era más beneficioso permanecer en el RAIS.

Destáquese que la deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por la accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso de la señora GOMEZ CASTRO, quien en 1994 se vinculó a Horizonte, comenzando su trasegar por Porvenir S.A, y Protección S.A conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 219 archivo 03, expediente digital), siendo Protección S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 2015. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces de la demandante sucedió, donde los beneficios brindados por el fondo privado, como pensión de forma anticipada, mejores condiciones pensionales, entre otros, eran un factor determinante, aunado a la promesa de recibir una asesoría continua y personalizada.

Igual situación se predica la RE-ASESORÍA de la que fue objeto la demandante según comunicado del 25 de marzo de 2014 (fl.377 del archivo 03 del expediente digital), pues la información suministrada por el fondo en tal momento, en fecha próxima al cumplimiento de los 47 años de edad, en parte alguna puede asimilarse al cumplimiento del deber de información cuando se surtió el traslado, ni mucho menos es dable señalar que la persona contaba con la suficiente ilustración para tomar una decisión sobre su futuro pensional, más aun, cuando la demandante indicó que el asesor del fondo privado ratificó la pertinencia de pertenecer en el RAIS.

Incluso, en gracia de discusión, aunque Porvenir S.A hubiese desmotivado oportunamente a la accionante, al avizorar la posible inconveniencia de permanecer en dicho fondo, a igual conclusión llegaría la Sala pues ya la Corte Suprema de Justicia ha establecido que ello NO tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por las razones referenciadas en la sentencia de radicación 68.838 de 2019, entre ellas:

“(…) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información”.

En todo caso, si la AFP incumplió su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura

en siquiera pensar o asimilar una re-asesoría o una movilidad, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a la administradora del RAIS accionada, a trasladar a COLPENSIONES E.I.C.E todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se

ADICIONARÁ la decisión adoptada por el a quo, quien tras declarar la ineficacia de la afiliación, ordenó a Protección S.A, el traslado de los *gastos de administración, comisiones de administración y pagos destinados a la conformación del capital del FGPM*, sin mencionar las primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, situación que si acaeció en la orden impartida a Porvenir S.A

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Protección S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Porvenir S.A, y sus antecesoras fusionadas.

Empero, se advierte procedente **REVOCAR PARCIALMENTE** los numerales, segundo, y tercero de la Sentencia apelada, respecto a la orden dada a Colpensiones E.I.C.E de recibir los aportes provenientes del RAIS, a “*satisfacción y equivalencia*”, en tanto que no se acreditó en el proceso un detrimento en el capital que debe recibir COLPENSIONES con destino al Fondo Común que se constituye para financiar las pensiones del régimen de prima media; teniendo en cuenta que además de los recursos de la cuenta de ahorro individual con los respectivos rendimientos, con la orden impuesta a PORVENIR S.A, PROTECCIÓN S.A de trasladar igualmente, comisiones de administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, los tres últimos indexados, y que se deben integrar al Fondo común que administra COLPENSIONES para garantía de las pensiones del régimen de prima media, se está garantizando que el fondo pensional público reciba todos los valores que debió percibir en el evento en que el accionante hubiere permanecido afiliado a esa entidad. Aunado a que, tampoco quedó establecido el detrimento o desmedro de los aportes que se acumularon en el RAIS.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...)Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la afiliada hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo de primera instancia, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente **indexado** por parte de Porvenir S.A, y Protección S.A, respecto del tiempo de permanencia en cada uno y teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltese las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, todas las administradoras del RAIS accionadas, deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E, detallando en forma pormenorizada a que

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **CONFIRMARÁ** el fallo proferido por el a quo.

Conforme los razonamientos que preceden, y pese a los juicios argumentos que en este punto ventila Porvenir S.A., no es dable acoger su postura, ni aun teniendo en cuenta el concepto que cita de la Superintendencia Financiera de Colombia, toda vez que el mismo no resulta vinculante, pues el criterio que resulta vinculante es el que de forma pacífica y reiterada ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias reseñadas, que constituyen un precedente vertical de obligatorio cumplimiento.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **modificándola** en los aspectos antes aludidos.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A, y a favor de la demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 07 de diciembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por la señora **LILIANA MARIA GOMEZ CASTRO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.894.990, en contra de **COLPENSIONES E.I.C.E., PORVENIR S.A, y PROTECCIÓN S.A.**

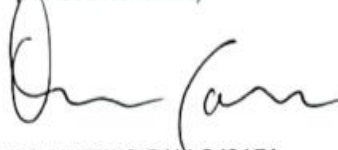
SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo de la providencia, bajo el entendido que PROTECCIÓN S.A, trasladará a COLPENSIONES E.I.C.E, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), al tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, conforme se indicó en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: REVOCAN PARCIALMENTE los numerales segundo, y tercero de la providencia, respecto a la orden dada a COLPENSIONES E.I.C.E. de recibir los aportes provenientes del RAIS, a “*satisfacción y equivalencia*”, conforme a lo indicado en la parte motiva de la providencia.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000, a favor de la demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	LILIANA MARIA GOMEZ CASTRO.
Demandado:	COLPENSIONES E.I.C.E, PORVENIR S.A y PROTECCIÓN S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-004-2019-00403-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	MODIFICA SENTENCIA.
Fecha de la sentencia:	14/07/2023.

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/07/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario